



Proceso	Ejecutivo
Demandante	Geny Johana Giraldo Giraldo
Demandado	Amparo del Socorro González Noreña
Radicado	05001-31-03-016-2017-00120-01
Instancia	Segunda
Procedencia	Juzgado Primero Civil del Circuito Ejecución Med.
Ponente	Luis Enrique Gil Marín
Asunto	Interlocutorio No. 051
Decisión	Confirma
Tema	Desistimiento tácito

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA SEGUNDA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín (Ant.), veintisiete de abril de dos mil veintitrés

I. OBJETO

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra el auto proferido el 15 de marzo de 2022, por el **JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN**, mediante el cual dio por terminado por desistimiento tácito, el proceso

Ejecutivo promovido por **GENY JOHANA GIRALDO GIRALDO** en contra de **AMPARO DEL SOCORRO GONZALEZ NOREÑA**.

II. ANTECEDENTES

El 15 de marzo de 2022, EL JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN, dio por terminado el proceso ejecutivo por estar inactivo por un período superior a los dos años; como consecuencia, ordenó el levantamiento de las medidas ejecutivas y, en caso, de existir embargo de remanentes, se tengan en cuenta.

La parte demandante interpuso el recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, con el siguiente soporte: En auto del 18 de mayo de 2019, el Despacho ordenó incorporar al proceso el memorial mediante el cual designó una dependiente judicial; no observa que el Despacho hubiera realizado otra actuación diferente, a pesar de lo cual procedió a dar por terminado el proceso por desistimiento tácito; no se puede perder de vista que por distintos acuerdos, el Consejo Superior de la Judicatura impuso condiciones de trabajo muy diferentes a las que venían rigiendo antes de la pandemia que se padece desde el 13 marzo de 2020; con el advenimiento del Decreto 806 del mismo año, se debe proceder al adelantamiento de los procesos por medios virtuales; lo que llevó a la expedición de las Circulares 11 y 27 en esa misma anualidad por el Consejo Superior de la Judicatura, para la digitalización obligatoria de los procesos físicos, convirtiéndolos en híbridos; es decir, se componen de una parte física y de otra digital, respecto de los cuales se tenía que dar acceso a las partes a través de las herramientas tecnológicas establecidas; como en la gran

mayoría de estrados judiciales se desactualizó el sistema de información judicial y la digitalización de los procesos se ha venido adelantado, en más de las veces con recursos propios de los funcionarios y empleados, ante la imposibilidad de acudir a los estrados judiciales a raíz de los protocolos de la bioseguridad propios de la pandemia, no se logró obtener información; pues ni siquiera se conoce si fue digitalizado para luego conceder el hipervínculo a cada uno de los interesados para conocer por los medios digitales su desarrollo; la decisión de dar por terminado el proceso la considera injusta y desproporcionada porque para cumplir con la carga de impulsión es requisito fundamental tener acceso al expediente, cuando en realidad no hay constancia en el sentido de que se hubiera tenido acceso para conocer la actuación.

El Decreto Legislativo 564 de 2020, ordenó suspender los términos de prescripción, caducidad y desistimiento tácito, citando para el efecto, la sentencia de constitucionalidad C-213 de 2020; el Consejo Superior de la Judicatura para afrontar la emergencia que se presentó por el Covid-19, mediante diferentes acuerdos ordenó la suspensión de términos, pero a la par debió permitir a los usuarios de la administración de justicia, el acceso virtual real y efectivo a los expediente para que de manera anticipada y suficiente, pudieran planear la realización de las actuaciones procesales dentro de los términos legalmente previstos; finalmente, resalta que no resulta razonable la terminación por desistimiento tácito y advierte que las medidas que se adoptaron a raíz de la emergencia sanitaria hay que aplicarlas en función del principio de la tutela judicial efectiva.

El 24 de noviembre pasado se resolvió en forma negativa el recurso de reposición y, en subsidio, concedió el de apelación; al efecto, el Juzgado argumentó que recibió el proceso del Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, donde la última actuación fue del 03 de mayo de 2019 y la posterior constancia secretarial del 08 de mayo de 2019, sin solicitudes pendientes por resolver y avocó el conocimiento por auto del 13 de agosto de 2019; consecuente con lo anterior, el proceso se encontraba inactivo por más de dos años y la consecuencia constitucionalmente válida que se sigue es la terminación por desistimiento tácito; precisa que al contrario de lo afirmado por la recurrente, el Consejo Superior de la Judicatura por Acuerdos PCSJA.11517, PCESJA20-11518, PCSJA-11519, PCSJA-11521, PCSJA20-A1526, PCSJA-11527, PCSJA-11528, OCSJA-11529, PCSJA-11532, PCSJA-11546, PCSJA-11549, PCSJA-11556 y PCSJA-11567, suspendió los términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020 y posteriormente ordenó el levantamiento de la suspensión desde el 1º de julio del mismo año y a partir de este momento tuvo la oportunidad de realizar cualquier solicitud o actuación para evitar las consecuencias previstas en el art. 317, no siendo suficiente las razones expuestas por la recurrente.

III. CONSIDERACIONES

La recurrente argumenta que, por auto del 18 de mayo de 2019, el Juzgado ordenó incorporar al expediente el memorial, mediante el cual designó una dependiente judicial y que no observa que hubiera realizado otra actuación diferente.

Como en efecto, no se precisa si lo que pretende al invocar dicha actuación es que se tenga en cuenta como causa de interrupción de los términos que corrían; o si en cambio, se tenga como el punto de partida para el computo del término de dos años, como requisito para la viabilidad de la terminación del proceso por desistimiento tácito; para abundar en garantías, el Tribunal tendrá en cuenta las dos hipótesis.

En cuanto a la interrupción de los términos establecidos para el desistimiento tácito, el literal c) del numeral 2. del art. 317 del C. General del Proceso, puntualiza: *"Cualquier actuación de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo"*.

Una interpretación lasa de esta norma, la haría inoperante, porque en efecto cualquier escrito con destino al proceso, así no requiera pronunciamiento, sería suficiente para interrumpir los términos previstos en la norma, lo que implicaría que se tendrían que contar de nuevo, lo que en muchos casos la haría ineficaz y sin ningún sentido práctico, de donde la interpretación que más se acomoda es la finalista; en cuyo caso, cuando se requiere a una de las partes para que cumpla con la carga que le incumbe para realizar un acto que está pendiente y, con tal propósito se le concede el término de treinta días, la única actuación que tiene la virtualidad de interrumpir el término es la realización del acto omitido para el cual fue requerido; ahora, si se trata del término de un año en los procesos declarativos y ejecutivos, o el dos años que se aplica al último desde la sentencia, los cuales se computan a partir de la inactividad sin que sea necesario requerimiento previo, las actuaciones que tienen la virtualidad de interrumpir

estos términos, son aquéllas que están encaminadas a lograr su avance que permita proferir la sentencia y, en los ejecutivos, después de proferida ésta, los que están encaminados a lograr su terminación, como ocurre con las liquidaciones del crédito y de las costas, las solicitudes de medidas ejecutivas, de avalúos, de remate y de fechas para su realización, entre otras; de tal manera, que una simple solicitud de copias o de una certificación, por citar solo dos ejemplos, no tendrían esa virtualidad porque en verdad no están encaminadas a superar etapas o fases del proceso para lograr su terminación, como es el proferimiento de sentencia en los procesos declarativos o la terminación con el cumplimiento de la obligación en los ejecutivos. En este sentido, se ha pronunciado el Tribunal de Casación, en sede constitucional, precisando:

“Entonces, dado que el desistimiento tácito» consagrado en el artículo 317 del Código General del Proceso busca solucionar la parálisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administración de justicia, la «actuación» que conforme al literal c) de dicho precepto «interrumpe» los términos para que se «decrete su terminación anticipada», es aquella que lo conduzca a «definir la controversia» o a poner en marcha los «procedimientos» necesarios para la satisfacción de las prerrogativas que a través de ella se pretenden hacer valer.

“En suma, la «actuación» debe ser apta y apropiada y para «impulsar el proceso» hacia su finalidad, por lo que,

«[s]imples solicitudes de copias o sin propósitos serios de solución de la controversia, derechos de petición intrascendentes o inanes frente al petitum o causa petendi» carecen de esos efectos, ya que, en principio, no lo «ponen en marcha» (STC4021-2020, reiterada en STC9945-2020).

“Ahora, lo anterior se predica respecto de los dos numerales de la norma comentada, ya que además que allí se afirma que el «literal c» aplica para ambos, mediante los dos se efectivizan los principios de eficacia, celeridad, eficiencia, lealtad procesal y seguridad jurídica. No obstante, dado que prevén hipótesis diferentes, es necesario distinguir en cada caso cuál es la «actuación eficaz para interrumpir los plazos de desistimiento».

“Como en el numeral 1º lo que evita la «parálisis del proceso» es que «la parte cumpla con la carga» para la cual fue requerido, solo «interrumpirá» el término aquel acto que sea «idóneo y apropiado» para satisfacer lo pedido. De modo que si el juez conmina al demandante para que integre el contradictorio en el término de treinta (30) días, solo la «actuación» que cumpla ese cometido podrá afectar el cómputo del término.

“En el supuesto de que el expediente «permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación (...) en primera o única instancia», tendrá dicha connotación aquella «actuación» que cumpla en el «proceso la función de impulsarlo», teniendo en cuenta la etapa en la que se encuentre y el acto que resulte necesario para proseguirlo.

"Así, el impulsor de un declarativo cuyo expediente ha estado en la «secretaría del juzgado» por un (1) año sin emplazar a uno de los herederos del extremo demandado, podrá afectar el conteo de la anualidad con el «emplazamiento» exigido para integrar el contradictorio.

"Si se trata de un coercitivo con «sentencia o auto que ordena seguir adelante la ejecución», la «actuación» que valdrá será entonces, la relacionada con las fases siguientes a dicha etapa, como las «liquidaciones de costas y de crédito», sus actualizaciones y aquellas encaminadas a satisfacer la obligación cobrada (...)" {CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia STC-111912020, del 09 de diciembre de 2020, M.P. Dr. Octavio Augusto Tejeiro Duque}.

Sin dificultad se constata que el memorial que el Juzgado ordenó incorporar al proceso, por auto proferido el 18 de mayo de 2019, por medio del cual se acreditó una dependiente, no tienen la virtualidad de interrumpir el término de dos años de parálisis, establecido para el proceso ejecutivo para que tenga lugar la terminación por desistimiento tácito, porque en verdad, no tiene la virtualidad de impulsar el proceso con miras a su terminación con el pago de la obligación, pues para estos efectos esa actuación es inane.

En la segunda hipótesis, se advierte que aun tomando como punto de partida para el computo de los dos años de inactividad del proceso, el 18 de mayo de 2019, cuando se profirió el mencionado auto, hasta el día 15 de marzo de 2022, cuando se emitió la providencia dando por terminado el

proceso ejecutivo, se había colmado con creces ese término de dos años, incluso descontando el periodo durante el cual rigió la suspensión de términos, que tuvo lugar del 16 de marzo al 1° de julio de 2020, como lo precisó la providencia emitida por el Juzgado de primer grado. Al efecto, tenemos: del 18 de mayo de 2019, al 16 de marzo de 2020, transcurrió un término de nueve meses y 21 días y, del 1° de julio de 2020 al 15 de marzo de 2022, transcurrió un término de 20 meses y 14 días, lo que arroja una parálisis del proceso mayor a treinta (30) meses, superando significativamente el término de dos años previsto para este caso. Para el computo de este término se descontó el período durante el cual rigió la suspensión de términos, como viene de precisarse.

Ahora, en cuanto a las plataformas digitales para que los litigantes tengan acceso a los expedientes, se advierte que por parte del Consejo Superior de la Judicatura, se han implementado, las que han funcionado y prestado sus servicios hasta la fecha; con la precisión, que si alguna dificultad se presenta, los usuarios pueden acudir presencialmente a los despachos judiciales, sin que esta sea una razón válida para que la parte demandante no hubiera impulsado el proceso, durante un periodo mayor a los treinta (30) meses; máxime si se había decretado medidas ejecutivas, en cuyo caso, tenía que hacer todas las gestiones necesarias para hacerlas efectivas, incluso, con el remate de bienes para lograr el cometido del proceso ejecutivo, como es el cumplimiento forzado de las obligaciones pretendidas.

Bajo estas circunstancias, tampoco se advierte vulneración a las garantías de acceso a la justicia y a la tutela judicial

efectiva, pues este principio también comprende la observancia y respeto a las reglas establecidas en los procedimientos, sin que en el presente caso se advierta que hayan sido desconocidas.

De cara al disenso formulado por la demandante, se advierte que no le asiste razón, lo que es suficiente para que se imponga la confirmación del auto recurrido, sin necesidad de otras consideraciones.

IV. RESOLUCION

A mérito de lo expuesto, la **SALA SEGUNDA DE DECISION CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN,**

R E S U E L V E

- 1.** Se confirma el auto de fecha y procedencia indicadas, por lo dicho en la parte motiva.
- 2.** Sin costas porque no se causaron.
- 3.** Se ordena devolver la actuación al Juzgado de origen.

COPIESE Y NOTIFIQUESE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Enrique Gil Marín', with a long horizontal stroke extending to the right.

LUIS ENRIQUE GIL MARIN
Magistrado